

Otorgar rango constitucional a los organismos de control de los servicios públicos privatizados

Proyecto Ingresado Nº 878

La Honorable Convención Constituyente sanciona:

Incorpórase un artículo nuevo en el Capítulo Segundo de la Primera parte de la Constitución Nacional.

"ARTICULO... Las prestaciones de servicios públicos por parte de instituciones de carácter estatal o de gestión privada responderán al interés general. El Congreso determinará la integración periódica y el funcionamiento de los organismos de regulación asegurando la publicidad de sus actos y el derecho de acceso a la información y de petición de los usuarios."

Incorpórase un nuevo inciso al artículo 86 de la Constitución Nacional.

"Inciso... Para el nombramiento de los funcionarios a cargo de los entes reguladores de los servicios públicos, se requerirá acuerdo del Senado."

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El artículo nuevo que proponemos tiende a resguardar el interés general, garantizando la prestación de los servicios públicos, ya sea que los mismos sean prestados por agencias estatales o por agencias privadas.

El centro de nuestra atención esta fijado en la necesidad de proteger a los ciudadanos frente al enorme poder de los prestadores de los servicios públicos, fortaleciendo su capacidad de participación, garantizando la publicidad y el acceso a la información.

Bajo este criterio, se favorece la transparencia en la prestación de los servicios públicos, y la adopción de mecanismos de canalización y resolución de conflictos de intereses, tales como las audiencias públicas.

La existencia de imperfecta información podría dar lugar a un comportamiento estratégico entre regulador y regulado determinándose la política reguladora en forma endógena. Dado el diferente poder económico de las partes involucradas (prestadores y consumidores) la predicción usual es que el regulador y el proceso regulatorio se inclinarán en favor de los intereses del prestador.

En la Argentina, la totalidad de los marcos regulatorios ha incorporado la figura de la Audiencia Pública. Este mecanismo originado en la legislación norteamericana obliga a fundamentar lo que se hace y están abiertas a cualquier persona que desee asistir.

La norma propuesta tiende a deslindar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, asignándole a aquél el rol de brindar la legislación-marco, y a éste el de cumplir la misma, conciliando los intereses de los prestadores, los usuarios, y el bien común.

La actividad reguladora debe resguardar el interés general. Los diferentes aspectos involucrados dentro de ese "interés general" son motivo de debate y pueden llegar a ser conflictivos entre sí, siendo responsabilidad del regulador el logro de la mejor resolución del mismo. En principio se reconocen los siguientes aspectos:

- a) calidad de la producción o desempeño de la actividad, lo que remite al concepto de eficiencia;
- b) existencia, mantenimiento y persistencia de la actividad o apoyo de la misma (estabilidad, continuidad, confiabilidad);
- c) evolución y desarrollo de la actividad (innovación, crecimiento y promoción);
- d) evaluación del impacto de la actividad (equidad, redistribución, seguridad y eliminación de la discriminación).

Dado que el Estado regula a través de entes creados a tal fin, se define la siguiente estructura jerárquica implícita: la sociedad (a través de sus representantes en el Congreso y en el Poder Ejecutivo) delega en un regulador la tarea de controlar a un prestador de servicios públicos para que éste tome decisiones productivas que maximicen el bienestar general.

Debe reconocerse que la posibilidad de que los miembros de las agencias reguladoras persigan intereses propios (o transmitidos por grupos de interés) requiere contar con monitores (independientes de los intereses a controlar) de la agencia reguladora. De allí la facultad del Congreso de participar en el nombramiento y remoción de los funcionarios de los entes reguladores de los servicios públicos.

JESUS RODRIGUEZ
CARLOS ALVAREZ
ALFREDO BRAVO
NOBERTO LAPORTA